

Señores:

**PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA  
(REPARTO)**

E.S.D.

**REFERENCIA:** SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL  
**MEDIO DE CONTROL:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  
**CONVOCANTE:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA  
**CONVOCADO:** CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA.

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 expedida en Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado general de **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA**, respetuosamente presento **SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN DERECHO** para que se convoque a la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba a la audiencia de que trata el artículo 2.2.4.3.1.1.9. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, antes de acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo con el fin de solicitar la declaratoria de nulidad de los siguientes actos administrativos: **(i)** Auto No. 107 del 25 de septiembre de 2023 mediante el cual se libró un mandamiento de pago; **(ii)** Resolución No. 001 del 20 de febrero de 2024 mediante la cual la convocada resolvió las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago; **(iii)** Auto No. 056 del 17 de abril de 2024 mediante el cual el ente de control resolvió el recurso de reposición, que quedó ejecutoriado el 30 de abril de 2024 **(iv)** los demás que hubieran servido de fundamento para expedir los anteriores. Así como también, el consecuente restablecimiento de los derechos conculcados a mi representada. Todo lo anterior de conformidad con los fundamentos fácticos y jurídicos que se expone en este escrito.

## **I. DESIGNACIÓN DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES**

*(Literal b del Artículo 2.2.4.3.1.1.6 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015)*

### **- PARTE CONVOCANTE**

**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA**, compañía de seguros legalmente constituida, identificado con el Nit 860.524.654-6 representada legalmente por el señor **JOSÉ IVAN BONILLA PEREZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.520.827 de Bogotá D.C., o quien haga sus veces. Tiene registrada como dirección para notificaciones físicas: la Calle 100 No. 9 A-45 Piso 12 de la ciudad de Bogotá D.C. y electrónicas al email: [notificaciones@solidaria.com.co](mailto:notificaciones@solidaria.com.co)

### **- APODERADO DE LA PARTE CONVOCANTE**

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con cédula

de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, con dirección de notificaciones físicas en la Avenida 6 A bis No. 35N-100, Centro Empresarial Chipichape, Oficina 212 de la ciudad de Cali, y electrónicas al email: [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co).

- **PARTE CONVOCADA**

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE CÓRDOBA**, representada legalmente por Mary Luz Daza, en su calidad de Gerente Departamental o quien haga sus veces, con dirección de notificaciones en la Calle 66 No. 5-70 Edificio Isabella 47 de la ciudad de Montería – Córdoba, y electrónicas al email: [responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co](mailto:responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co).

**II. OPORTUNIDAD DE LA PRESENTE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN**

En este caso particular y concreto, los términos de caducidad se deben contabilizar a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 001 del 20 de febrero de 2024, esto es, el 056 del 17 de abril de 2024, proferido por la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba.

El Auto No. 056 del 17 de abril de 2024 mediante el cual el ente de control resolvió el recurso de reposición, quedó ejecutoriado el 30 de abril de 2024. Con base en lo anterior, se puede esclarecer que la presente solicitud de conciliación es oportuna, como quiera que los días corren desde el 01 de mayo de 2024 hasta el 01 de septiembre de 2024, tal como lo establece el artículo 164, numeral 2, literal d) de la ley 1437 de 2011 (CPACA).

**III. HECHOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO A LAS PRETENSIONES**

*(Literal c del Artículo 2.2.4.3.1.1.6 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015)*

**PRIMERO:** La Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba profirió el fallo con responsabilidad fiscal No. 179 del 8 de abril de 2022 dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 80233-064-958, declarando por una parte, fiscalmente responsables a Bibiana Ester Villorina y a Paulina del Socorro Carbono Cuevas y por la otra, civilmente responsable a la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa con fundamento en el contrato de seguro documentado en la Póliza de Cumplimiento en favor de entidades estatales No. 515-47-994000005295.

**SEGUNDO:** En virtud de la anterior declaración, la entidad convocada, impuso a los sujetos procesales mencionados atrás la obligación de pagar CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS \$44.313.250 como resarcimiento al daño patrimonial reconocido en el fallo.

**TERCERO:** Una vez agotada la vía administrativa. El fallo con responsabilidad fiscal No. 179 del 8 de abril de 2022 quedó ejecutoriado el 3 de junio de 2022.

**CUARTO:** Mediante Auto No. 107 del 25 de septiembre de 2023, notificado a mi representada el 31 de octubre de 2023, la Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba libró mandamiento de pago en favor del Tesoro Nacional y en contra de Bibiana Ester Villorina, Paulina del Socorro y de la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Coperativa, en adelante la aseguradora, dentro del proceso de cobro coactivo No. 502 por el valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$44.313.250).

**QUINTO:** El 16 de noviembre de 2024, dentro de la oportunidad legal, la aseguradora, formuló excepciones en contra del mandamiento de pago, planteando entre otras cosas, principalmente la falta de ejecutoria del título contenido en el fallo con responsabilidad fiscal ya que éste no contiene una obligación clara, ni expresa, ni exigible frente a ella, de manera que no resulta jurídicamente viable su ejecución.

**SEXTO:** El 20 de febrero de 2024 la Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba, profirió la Resolución No. 001, mediante la cual resolvió las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago No. 107 del 25 de septiembre de 2023, declarando no probadas las excepciones formuladas por la aseguradora y ordenando seguir adelante con la ejecución.

**SÉPTIMO:** El fundamento de la decisión se limitó a indicar que la aseguradora debe pagar el valor total expresado en el título sin resolver de fondo ninguna de las excepciones propuestas por mi representada. Es decir, el ente de control no realizó ningún análisis frente a la carencia de elementos del título advertida en las excepciones.

**OCTAVO:** La decisión fue recurrida por la aseguradora el 15 de abril de 2024. Al no contar con un análisis de fondo por parte del ente de control, frente a lo excepcionado en la oportunidad legal, se reiteraron los argumentos expuestos, solicitando al fiscalizador una vez más que estudiara la ejecutividad del título.

**NOVENO:** El 17 de abril de 2024, mediante el Auto No. 056 del 17 de abril de 2024, la Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba resolvió el recurso formulado por mi representada, nuevamente sin realizar ningún estudio de los argumentos propuestos y confirmando la Resolución No. 001 del 20 de febrero de 2024.

Señaló el ente de control en esta decisión, que *“el monto por el que se declaró la responsabilidad fiscal proviene del ejercicio jurídico y técnico que analizó ampliamente el incumplimiento contractual y la incidencia de dicho incumplimiento en el monto del contrato asegurado, luego de efectuar los análisis descritos se concluyó con certeza el valor del daño al patrimonio público”*. Esta manifestación confirma la falta de estudio de las excepciones propuestas frente al mandamiento de pago, pues como será evidente para el despacho judicial que conozca este proceso, la discusión de la aseguradora no versa sobre el supuesto incumplimiento contractual, sino única y exclusivamente, sobre la falta de claridad del fallo con el que se pretende ejecutar a mi representada, respecto a la obligación que éste le impone.

**DÉCIMO:** Una vez agotado el proceso de cobro coactivo No. 502, concluimos que el ente de control se mantuvo renuente a estudiar las excepciones presentadas contra el mandamiento de pago, que grosso modo, parten de la falta de claridad de la obligación contenida en el título. Ésta era la

oportunidad para que la Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba revisara nuestros argumentos y expusiera los motivos por los cuales a su juicio dicha obligación es clara, expresa y actualmente exigible.

**DÉCIMO PRIMERO:** Sin que implique reconocimiento de que el fallo con responsabilidad fiscal No. 179 comporta un verdadero título ejecutivo, mi representada, con el único fin de evitar la práctica de medidas cautelares en su contra, el 28 de mayo de 2024 procedió con el pago del valor plasmado en dicho acto administrativo como detrimento patrimonial causado al erario público, más los supuestos intereses de mora generados hasta tal fecha, para un total de SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS (\$77.525.229).

#### **IV. PRETENSIONES**

*(Literal d del Artículo 2.2.4.3.1.1.6 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015)*

De conformidad con los hechos antes narrados, el convocante solicita a la Procuraduría Delegada para asuntos Administrativos, que cite y haga comparecer a la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba, con la el fin de llegar a una solución de mutuo acuerdo respecto a las peticiones que a continuación de plasman:

**PRIMERA:** Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos proferidos por la convocada Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba:

- (i) Auto No. 107 del 25 de septiembre de 2023 mediante el cual se libró un mandamiento de pago;
- (ii) Resolución No. 001 del 20 de febrero de 2024 mediante la cual la convocada resolvió las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago;
- (iii) Auto No. 056 del 17 de abril de 2024 mediante el cual el ente de control resolvió el recurso de reposición
- (iv) Los demás que hubieran servido de fundamento para expedir los anteriores.

**SEGUNDA:** Que como consecuencia de la citada declaratoria, se decrete como restablecimiento del derecho lo siguiente:

1. La restitución de SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$77.525.229) MCTE, pagados por mi representada en favor del Tesoro Nacional el 28 de mayo de 2024 por concepto de capital e intereses de conformidad con lo ordenado en los actos administrativos que serán materia de impugnación.
2. Que se indexe el valor de SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$77.525.229) MCTE a la fecha de pago efectivo por parte de la Contraloría general de la República – Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba.

#### **I. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN**



## 1. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE IMPUGNARÁ ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA SE EXPIDIERON CON FALSA MOTIVACIÓN.

Los actos administrativos objeto de esta solicitud de conciliación se encuentran viciados de falsa motivación. El fundamento de la expedición del Auto No. 107 del 25 de septiembre de 2023, de la Resolución No. 001 del 20 de febrero de 2024 y del Auto No. 056 del 17 de abril de 2024, es el fallo No. 179 del 8 de abril de 2022 proferido dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 80233-064-958, a través del cual se declaró civilmente responsable a la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa con fundamento en el contrato de seguro documentado en la Póliza de Cumplimiento en favor de entidades estatales No. 515-47-994000005295. Partiendo de que la base de la expedición de los citados actos es el citado fallo, será preciso insistir en que éste no reúne los requisitos de un título ejecutivo y por lo tanto resultaba jurídicamente improcedente ejecutarlo por la vía coactiva, de ahí que los motivos expuestos en los referidos actos para llevar a término el proceso de cobro coactivo No. 502 no se acompasan con la realidad jurídica.

Los actos administrativos tienen presupuestos de existencia y validez so pena de ser declarados nulos conforme al artículo 138 del CPACA. Estos elementos son clasificados en internos y externos. Los primeros se refieren a las formalidades que debe tener todo acto administrativo y los segundos, pretenden dar a conocer los motivos, objeto y finalidad del mismo, circunstancias que permiten al administrado controvertir o acoger lo expresado en él. La exposición de motivos es una exigencia que se deriva del debido proceso y el derecho de defensa que garantiza la transparencia del ejercicio de la actividad pública, y permite al afectado conocer lo que se pretende con el acto notificado. En consonancia con ello, el artículo 42 del CPACA dispuso al respecto:

*“Artículo 42. Contenido de la decisión. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, **se tomará la decisión, que será motivada.**”*

*La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos.”*

De conformidad con el artículo citado, los actos administrativos que contengan decisiones que afecten a los particulares deben motivarse al menos de forma sumaria, pues el análisis de los hechos y razones que fundamentan la decisión, garantiza el derecho de defensa y de audiencia en contra de quien se profiere la providencia y enmarcan en este caso, el contenido de la discusión. Por lo tanto, los motivos de los actos administrativos constituyen un elemento estructural y su ausencia o la falsa motivación generan la nulidad del acto, de conformidad con lo previsto en el artículo 138 del CPACA.

Sobre esta causal de anulación el Consejo de Estado ha precisado que: *“(…) es el vicio que afecta el elemento causal del acto administrativo, referente a los antecedentes legales y de hecho previstos en el ordenamiento jurídico para provocarlo, es decir, que las razones expuestas por la Administración al tomar la decisión, sean contrarias a la realidad. La causa o motivo de los actos administrativos (elemento causal) se conforma de los fundamentos de hecho y de derecho que son los que determinan la decisión que la Administración adopta, así cuando existe falsa motivación, se*

*entiende que la sustentación fáctica en que se apoya no corresponde a la realidad.”<sup>1</sup>*

Descendiendo al caso de estudio, encontramos que los actos demandados sientan sus bases en el citado fallo con responsabilidad fiscal No. 179 del 8 de abril de 2022, constituyéndolo como un título ejecutivo que a su juicio se puede cobrar por la vía coactiva. Así las cosas, cuando mi representada formuló excepciones contra el mandamiento de pago, cuestionó la ejecutoriedad de dicho título, pues el mismo no contiene una obligación clara, expresa ni actualmente exigible por la Contraloría General a la aseguradora que represento, ya que, la póliza de cumplimiento .

A partir de la Circular No. 005 del 16 de marzo de 2020 la Contraloría General de la República dio directrices a las distintas unidades de investigación en todo el país, para que estas se tuvieran en cuenta al momento de tomar decisiones relacionadas con las pólizas que fundamentan la vinculación de las compañías de seguros dentro de los procesos de responsabilidad fiscal y coactivos que tengan fundamento en un fallo con responsabilidad fiscal. La citada circular dispuso:

*“El operador fiscal deberá verificar que no se realice una indebida acumulación de vigencias o de valores asegurados de las pólizas de seguros y en consecuencia la vinculación de la aseguradora se hará con sujeción a la respectiva modalidad prevista en el contrato de seguro.”*

De la anterior directriz se desprende que la intención del ente de control, radica en dotar de seguridad jurídica y claridad los actos administrativos que ella expide, exigiendo al operador administrativo que realice un estudio juicioso que lo conduzca a plantear unos motivos sólidos y ajustados a derecho en tales providencias, puntualmente, cuando se trate de decisiones que afecten de cualquier forma a las aseguradoras que integran los procesos. Así las cosas, resulta evidente la imposición de la Contraloría de que sus actos administrativos planteen con claridad las obligaciones que de ellos deriven para una compañía de seguros.

En el caso que nos convoca, el fallo con responsabilidad fiscal tantas veces comentado se limitó a indicar un valor de detrimento patrimonial sin precisar con claridad cuál es la obligación indemnizatoria de mi representada frente ha dicho detrimento. Lo cierto es que, el ente de control no precisó el valor de la obligación a cargo de la Compañía de seguros, y esto fue excepcionado oportunamente por la aseguradora en el momento que se pronunció frente al mandamiento de pago. No obstante, la Contraloría, sin motivación alguna resolvió las excepciones manifestando que al tercero civilmente responsable le correspondía pagar el valor total del detrimento, circunstancia que no corresponde con la realidad jurídica, pues la obligación de mi representada se encuentra delimitada por las especiales condiciones reguladoras de la relación aseguraticia que sirvió de fundamento para su vinculación al juicio fiscal.

En definitiva, resulta contundente la disconformidad entre la realidad fáctica que debió servir de respaldo para la expedición y confirmación del mandamiento de pago que se impugna, y el fundamento fáctico y jurídico del que se valió la Contraloría para motivarlo, pues los postulados en que sienta las bases de la orden de pago, no guardan correspondencia alguna con la obligación real del tercero civilmente responsable, de modo que, la situación descrita no nos deja otro camino

---

<sup>1</sup> Sentencia del 8 de febrero de 2007, expediente 15298, CP. María Inés Ortiz Barbosa.

que concluir la falsa motivación que revisten los actos atacados, para nacer a la vida jurídica y producir los efectos esperados.

## **2. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SE EXPIDIERON CON INFRACCIÓN DEL ESTATUTO MERCANTIL.**

El Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Cuarta, Consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, en sentencia del 15 de marzo de 2012, Radicación No. 25000-23-27-000-2004-92271-02 (16660), precisó que, la nulidad derivada de la infracción de las normas en las que ha debido fundarse el acto administrativo, debe ser directa y ocurre cuando se configura una de las siguientes situaciones: **i) falta de aplicación, ii) aplicación indebida o, iii) interpretación errónea.** Veamos:

*“El artículo 84 del C.C.A consagra, entre otras causales de nulidad, la derivada de la infracción de las normas en las que ha debido fundarse el acto administrativo o mejor, la nulidad por violación de una norma superior, como se conoce genéricamente a esta causal de nulidad. La contravención legal a la que hace referencia esa causal debe ser directa y ocurre cuando se configura una de las siguientes situaciones: i) falta de aplicación, ii) aplicación indebida o, iii) interpretación errónea. Según la doctrina judicial del Consejo de Estado, ocurre la primera forma de violación, esto es, la falta de aplicación de una norma, ya porque el juzgador ignora su existencia, o porque a pesar de que conoce la norma, tanto que la analiza o sopesa, sin embargo, no la aplica a la solución del caso. También sucede esa forma de violación cuando el juez acepta una existencia ineficaz de la norma en el mundo jurídico, pues no tiene validez en el tiempo o en el espacio. En los dos últimos supuestos, el juzgador puede examinar la norma, pero cree, equivocadamente, que no le es aplicable al asunto que la resuelve, evento en el cual se está ante un típico caso de violación por falta de aplicación, no de interpretación errónea, en razón de que la norma por no haber sido aplicada no trascendió al caso. Se presenta la segunda manera de violación directa, esto es, por aplicación indebida, cuando el precepto o preceptos jurídicos que se hacen valer se usan o se aplican a pesar de no ser los pertinentes para resolver el asunto que es objeto de decisión. El error por aplicación indebida puede originarse por dos circunstancias: 1.- Porque el juzgador se equivoca al escoger la norma por inadecuada valoración del supuesto de hecho que la norma consagra y 2.- Porque no se establece de manera correcta la diferencia o la semejanza existente entre la hipótesis legal y la tesis del caso concreto. Y, finalmente, se viola la norma sustancial de manera directa, cuando ocurre una interpretación errónea. Sucede cuando el precepto o preceptos que se aplican son los que regulan el asunto por resolver, pero el juzgador los entiende equivocadamente, y así, erróneamente comprendidos, los aplica. Es decir, ocurre cuando el juzgador le asigna a la norma un sentido o alcance que no le corresponde.”*

De acuerdo con la anterior clasificación de las modalidades en las cuales puede ocurrir dicha causal de nulidad, se mostrará respecto de las siguientes normas, las circunstancias en las que se configura la mentada causal:

### **Falta de aplicación de los artículos 1047 y 1056 del Código de Comercio**

En este punto, es necesario mencionar que el artículo 1047 del Código de Comercio establece el contenido de la póliza, siendo pertinente resaltar los siguientes numerales:

“(…) 6. la vigencia del contrato, con indicación de las fechas y horas de iniciación y vencimiento, o el modo de determinar unas y otras;

(…) 9) Los riesgos que el asegurador toma su cargo;

(…) 11) Las demás condiciones particulares que acuerden los contratantes.”

Por otra parte, el artículo 1056 ibídem consagra la delimitación contractual de los riesgos que asume el asegurador, en tal sentido prescribe la norma: “Con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado.” De acuerdo a esto, se puede inferir que la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, asumió expresamente determinados riesgos cuando expidió la Póliza de Cumplimiento en favor de entidades estatales No. 515-47-994000005295, se trata de los siguientes:

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CONTRATO		
CUMPLIMIENTO	08/09/2015	08/07/2016
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	08/09/2015	08/01/2019
PAGO ANTICIPADO	08/09/2015	08/07/2016
CALIDAD DEL BIEN	08/09/2015	08/07/2016

Los riesgos asumidos por la Compañía están cubiertos s través de los diferentes amparos concertados en el seguro. Estos amparos, son independientes y autónomos desde dos perspectivas: primero, en cuanto al riesgo que cubren y, segundo, en relación con el valor asegurado para cada uno de ellos. Consecuentemente, no se podrá acumular el valor de uno de ellos para cubrir un riesgo diferente. En este orden de cosas, para dotar de claridad el fallo con responsabilidad fiscal y para que éste cumpla los requisitos de un verdadero título ejecutivo, la Contraloría debió determinar con precisión el amparo de la póliza que se afectaría y a partir del cual surgiría una obligación indemnizatoria a cargo de mi representada.

En el caso que nos ocupa, se reitera que una vez finalizado el juicio fiscal la Contraloría se limitó a señalar el valor del presunto detrimento sin realizar un análisis serio del riesgo que se materializó a la luz del contrato de seguro y el consecuente amparo a afectar. Esto es importante porque cada amparo tiene un valor asegurado diferente que se debe respetar:

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO	08/09/2015	08/07/2016	7,389,611.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	08/09/2015	08/01/2019	3,694,805.70
PAGO ANTICIPADO	08/09/2015	08/07/2016	36,948,057.00
CALIDAD DEL BIEN	08/09/2015	08/07/2016	7,389,611.40

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, la garantía de cumplimiento cubre los perjuicios que demuestre la Contraloría en procesos de responsabilidad fiscal que se adelanten para determinar el detrimento patrimonial causado a la administración pública, como consecuencia del



incumplimiento de las obligaciones del contrato garantizado. Es decir, que en un juicio fiscal no resulta viable afectar los demás amparos, consecuentemente mi representada no podía ser obligada por la vía coactiva a pagar un valor superior al valor asegurado del amparo de cumplimiento.

En mérito de lo expuesto, se concluye que la Contraloría General de la República omitió dar aplicación a las disposiciones normativas precitadas.

### **3. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS IMPUGANDOS SE EXPIDIERON CON INFRACCIÓN DE LAS NORMAS EN QUE DEBÍA FUNDARSE.**

La Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegia da de Córdoba excedió su competencia, al seguir adelante con la ejecución de un fallo con responsabilidad fiscal que no contiene una obligación clara, ni expresa ni exigible. Al proceder de esa forma generó a mi representada, entre otros perjuicios, un daño emergente que supera los setenta millones de pesos. Las determinaciones del ente de control contenidas en los actos impugnados son abiertamente ilegales y de ninguna forma se acompasan con los fines del Estado. La responsabilidad fiscal tiene una naturaleza meramente indemnizatoria, a su turno, la naturaleza del contrato de seguro también es meramente indemnizatoria dentro de los límites pactados en el contrato, por lo tanto, la transgresión de esos límites, traduce en una extralimitación de los operadores administrativos y en una desviación del uso que le están dando al poder que la función administrativa les confiere.

Valga traer a colación el artículo 6 de la Constitución Política, del cual se desprende la prohibición que rodea a los funcionarios públicos, de extralimitarse en el cumplimiento de sus funciones, así pues, es del todo claro que estos últimos están sujetos al estricto cumplimiento del rol que desempeñen en la administración pública, o de lo contrario, al sobrepasarlo incurrirían en una posible responsabilidad, bajo el efecto de que aquellas actuaciones ejecutadas en exceso se tendrían como abiertamente inconstitucionales, ilegales o irregulares.

Ahora bien, la normativa colombiana prevé factores de competencia que ofrecen una serie de criterios que permiten determinar a qué funcionario le corresponde el conocimiento de cada asunto en particular, precisamente, es la misma estructura del Estado la que enseña la especialidad que acompaña a cada una de sus ramas bajo el amparo de la constitución y de la ley para el efectivo desarrollo de sus funciones. En esencia, las facultades de los funcionarios públicos no pueden ir más allá de las atribuciones conferidas por la ley, es así que cuando sus actos se encuentran por fuera de sus atribuciones son debatidos inmediatamente.

#### **V.PRUEBAS QUE SE PRETENDE HACER VALER**

*(Literal f del Artículo 2.2.4.3.1.1.6 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015)*

1. Fallo con responsabilidad fiscal No. 179 del 8 de abril de 2022 proferido en el marco del proceso No. 80233-064-958.
2. Copia del Auto No. 107 del 25 de septiembre de 2023 mediante el cual se libró un mandamiento de pago.

3. Copia del escrito de excepciones presentadas contra el mandamiento de pago.
4. Copia de la Resolución No. 001 del 20 de febrero de 2024 mediante la cual la convocada resolvió las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago.
5. Copia del recurso de reposición formulado contra la Resolución No. 001 del 20 de febrero de 2024.
6. Copia del Auto No. 056 del 17 de abril de 2024 mediante el cual el ente de control resolvió el recurso de reposición.
7. Copia del comprobante de consignación SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$77.525.229) MCTE.
8. Auto de archivo del proceso de cobro coactivo No. 502 por pago total de la obligación.

#### **VI. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA DE LAS ASPIRACIONES QUE SE PRETENDEN CONCILIAR**

*(Literal h del Artículo 2.2.4.3.1.1.6 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015)*

La estimo en la suma de **SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$77.525.229) MCTE**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 de la ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 32 de la ley 2080 de 2021: *“Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta (...)”*.

#### **VII. JURAMENTO**

*(Literal i del Artículo 2.2.4.3.1.1.6 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015)*

Bajo la gravedad del juramento, manifiesto que ni mi poderdante ni el suscrito hemos presentado, hasta la fecha, parecida solicitud ante otra autoridad, con identidad de violación, hechos y derechos reclamados a la de la referencia. ***(Literal i, Artículo 2.2.4.3.1.1.6 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015)***

#### **VIII. NOTIFICACIONES**

*(Literal j del Artículo 2.2.4.3.1.1.6 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015)*

Mi poderdante y el suscrito, podemos ser notificados en la Avenida 6 A bis No. 35N-100, Centro Empresarial Chipichape, Oficina 212 de la Ciudad de Cali, y electrónicas al email: [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co).

La Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Colegiada de Córdoba puede ser notificada en la Calle 66 No. 5-70 Edificio Isabella 47 de la ciudad de Montería – Córdoba, y en el email: [responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co](mailto:responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co).

#### **IX. ANEXOS**

1. Documentos aportados con la solicitud de conciliación y relacionados en el acápite de pruebas.
2. Certificado de existencia y representación legal de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA.
3. Escritura Pública No. 1764 del 23 de mayo de 2015 mediante la cual se confirió poder general a la aseguradora con su correspondiente certificado de vigencia.
4. Constancia de envío del presente escrito de conciliación con sus anexos a la entidad convocada.
5. Constancia de envío del presente escrito de conciliación con sus anexos a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Atentamente,



**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**

**C.C. No. 19.395.114 de Cali**

**T.P. No. 39.116 del Consejo Superior de la J.**